

NOTIFICACIÓN POR AVISO



Santiago de Cali, 15 de Agosto de 2023

Citar este número al responder: 0713-751142023

Señora

STHEPANIE SERRANO RESTREPO

Calle 34 No. 3N 100 AP 301 B

Santiago de Cali, Valle del Cauca

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 "Por la cual se Expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" se remite el presente oficio como Constancia de notificación por aviso a la señora **STHEPANIE SERRANO RESTREPO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.29.116.685, del contenido del "AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMIANACIONES" del 04-de Agosto de 2023", expedida por la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC.

Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación quedará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso.

Se adjunta al presente aviso de notificación copia íntegra del "AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" del 04 de Agosto de 2023

Atentamente,


WILSON ANDRES MONDRAGON AGUDELO

Técnico Administrativo Grado 13 DAR-Suroccidente
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC

Archívese en: 0713-039-002-037-2021





“AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” 04 AGR 2022

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC - en uso de sus facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27 octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,

CONSIDERANDO:

Que, en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra el expediente con radicado No. 0713-039-002-037-2021, originado a partir del informe de visita del 18 de junio de 2021, por medio del cual se adelanta investigación administrativa sancionatoria ambiental en contra de la sociedad Diez Bigotes S.A.S., identificada con Nit. 901091468-0, por presunta infracción sobre el recurso hídrico que puede afectar la quebrada el Rincón, localizado en el lote N° 3 de la Parcelación Los Morales, Corregimiento Dapa, jurisdicción del municipio de Yumbo.

Que, en el desarrollo de la investigación, se han expedido los siguientes actos administrativos:

- Auto de indagación preliminar del 17 de diciembre de 2021;
- Resolución 0710 N° 0713-000294 del 15 de marzo de 2022, por medio de la cual se impuso medida preventiva sobre la sociedad Diez Bigotes S.A.S., identificada con Nit. 901091468-0, consistente en suspensión inmediata de las actividades de “lavado de zonas duras y/o blandas que hayan estado en contacto con los caninos o sus heces y que puedan generar aguas que discurran hacia el drenaje aportante de la quebrada El Rincón”;

Auto por medio del cual se inicia el procedimiento sancionatorio ambiental de fecha 15 de junio de 2022, en contra de la sociedad Diez Bigotes S.A.S., identificada con Nit. 901091468-0.

Auto por medio del cual se decretan pruebas de oficio de fecha 5 de octubre de 2022;

De igual forma obra en el expediente el acta de imposición de sellos, cierre preventivo y definitivo de la actividad económica, realizada por la Inspección Primera de Policía del municipio de Yumbo del 12 de octubre de 2022.

Que, obra en el expediente a folios 145 a 148, el certificado de tradición del inmueble donde desarrolla sus actividades la sociedad Diez Bigotes, es decir, del lote N° 3 de la Parcelación Los Morales, Corregimiento Dapa, jurisdicción del municipio de Yumbo, correspondiente con la matrícula inmobiliaria N° 370-356565 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 8

Que, en el certificado de tradición no se registra en ninguna de las anotaciones como propietaria la sociedad Diez Bigotés S.A.S., identificada con Nit. 901091468-0.

Que, en la anotación N° 13, del 27 de enero de 2021, se registra como propietarios del inmueble Adriana Lisette Daza Hernández, con C.C. #29.116.685 y Sthepanie Serrano Restrepo, con C.C. #1.144.029.277, quienes adquirieron en compraventa por medio de la escritura pública N° 2964 30 de diciembre de 2020 otorgada en la notaría 12 de Cali.

Que, con el fin de determinar la respectiva responsabilidad por presunta infracción de la normatividad ambiental en el predio Lote N° 3, con matrícula inmobiliaria 370-356565, se estableció de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 222 de 1995, modificatorio del artículo 200 del código de comercio en su primer inciso, "los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros", de lo cual se infiere que el representante legal de una sociedad es responsable por los perjuicios que causa y las irregularidades que ocurran en su administración, ya sea por acción u omisión, quien actúe como representante legal de una empresa asume ciertos riesgos en razón a su responsabilidad por las decisiones que tome o deje de tomar, pues tanto la acción como la omisión pueden ser generadores de responsabilidades.

Naturalmente que las irregularidades que un representante legal cometa en el desempeño de sus funciones, implican una responsabilidad administrativa y hasta penal frente a los socios o a terceros, por lo perjuicios económicos o hasta morales que se deriven de tales hechos; el representante legal es el ejecutor de las decisiones que le encarga la sociedad, y de las que por su autonomía decida ejecutar, decisiones que pueden tener consecuencias negativas para la sociedad y para terceros por las cuales tendrá que responder eventualmente.

Que, igualmente en el inciso 3 del mismo artículo se estableció la presunción de la culpa del administrador "En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador", situaciones que permiten concluir que es procedente vincular a quien al momento de los hechos materia de investigación ostentaba la calidad de representante legal de la sociedad Diez Bigotes, es decir, el señor Diego Alejandro Daza Hernández, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.130.600.538.

Que, en relación con la protección del medio ambiente, en la Constitución Política de Colombia y, las facultades del Estado y de las Corporaciones Autónomas, se establecen entre otras, las siguientes disposiciones:

"Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"

(...)

Art. 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder a interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica."

(...)

Art. 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Comprometidos con la vida



Es deber del Estado proteger la diversidad e integralidad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

Art. 80: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la recuperación de los daños causados:
(...)"

Que, en el Decreto 1076 de 2015, se estableció la competencia de las corporaciones autónomas regionales:

"ARTÍCULO 1.2.5.1.1 Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO -Las corporaciones autónomas regionales y a las de desarrollo sostenible, se denominarán corporaciones."

Que, mediante la Ley 99 de 1993, se crearon las Corporaciones Autónomas Regionales y, se establecieron sus funciones:

ARTÍCULO 23. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

1) (...);

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

(...)

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

(...)

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados;

(...)"

Que, al respecto, es preciso señalar que existe para los particulares y propietarios o poseedores de bienes inmuebles una especial responsabilidad en la preservación y protección del medio ambiente, más aún, cuando de su posible afectación pueden derivarse amenazas a derechos de vital



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 4 de 8

importancia para las personas y la conservación de los recursos naturales, responsabilidad que procura evitar deterioros al ambiente y, practicar su actividad económica dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental acorde con la normatividad vigente.

Que, en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

Que, es necesario hacer mención que en artículo 80 de la constitución política se establece que el estado deberá imponer las sanciones legales y exigir la recuperación de los daños causados ante el deterioro ambiental.

Que, en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", se estableció lo siguiente:

Artículo 1º. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

(...)

Artículo 3º. Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

(...)

Artículo 4º Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.

Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Artículo 5º, Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.



Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que, para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión."

Que, en relación con el proceso objeto del presente acto administrativo, es pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

Artículo 18°. "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayas no existentes en el texto original).

Que, con base en los hechos descritos en el informe de visita del 18 de junio de 2021, la imposición de medida preventiva de suspensión de actividades del 15 de marzo de 2022 y, el auto de inicio del procedimiento sancionatorio ambiental del 15 de junio de 2022, se configuran elementos probatorios suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental por presunta infracción en materia ambiental a los recursos naturales, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, transcrito en párrafos anteriores.

Que, conforme con lo expuesto, se considera procedente vincular a la investigación sancionatoria ambiental como presuntas infractoras, a las propietarias del inmueble Adriana Lisette Daza Hernández, con C.C. #29.116.685 y Stephanie Serrano Restrepo, con C.C. #1.144.029.277 y, en contra del señor Diego Alejandro Daza Hernández, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.130.600.538, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de presunta infracción ambiental.

Que, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Que, igualmente con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de comprobarse que los hechos materia del procedimiento fueren constituidos de delitos, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, esta autoridad pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que haya lugar desde las competencias administrativas y legales.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 6 de 8

Que, adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.

Que, el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suoccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta bajo el expediente con radicado **0713-039-002-037-2021**, iniciado mediante Auto del 15 de junio de 2022, en contra de la sociedad Diez Bigotes S.A.S, identificada con Nit. 901091468-0, **a las señoras** Adriana Lisette Daza Hernández, con C.C. #29.116.685 y Sthepanie Serrano Réstrepo, con C.C. #1.144.029.277, en calidad de copropietarias y, **al señor** Diego Alejandro Daza Hernández, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.130.600.538, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción sobre los recursos naturales y la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo primero. Informar a las personas investigadas que ellas o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo segundo. Informar a las personas investigadas que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas los obrantes en el expediente 0713-039-002-037-2021.

Parágrafo tercero. Informar a los investigados que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.



Parágrafo cuarto. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la Corporación CVC, podrá realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, y recopilar todo tipo de pruebas orientadas a esclarecer los hechos materia de investigación, que permitan determinar la responsabilidad o no de la parte investigada, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo quinto. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el o los presuntos infractores acorde con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo sexto. Si de los hechos materia del presente proceso sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: El encabezado y la parte resolutive del presente acto administrativo, deberá publicarse por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad Diez Bigotes S.A.S., identificada con Nit. 901091468-0, o quien haga sus veces o a su(s) apoderado(s) legalmente constituido(s) quien deberá acreditar su calidad conforme lo prevé la ley.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar las personas investigadas Adriana Lisette Daza Hernández, con C.C. #29.116.685 y Sthepanie Serrano Restrepo, con C.C. #1.144.029.277 y, Diego Alejandro Daza Hernández, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.130.600.538, personalmente o por Aviso si hubiere lugar a ello, del contenido del presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 al 69 de la ley 1437 de 2011, – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o a su apoderado debidamente constituidos, en concordancia con los artículos 18 y 19 de la Ley 1333 de 2009.

En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y, con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 8 de 8

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Santiago de Cali, a los

04 AÑO, 2023

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI

Director Territorial

Dirección Ambiental Regional Suroccidente

Elaboración/Revisión jurídica: Luis H. Cardona C./Profesional E./DAR Suroccidente. 

Revisó: Adriana P. Ramirez Delgado/ Coordinadora UGC Yumbo. 

Archívese en expediente: 0713-039-002-037-2021